

C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente.**

**Primero:** Que, comparece don Manuel Guerra Fuenzalida, abogado, interponiendo acción constitucional de amparo en favor de Francisco Coeymans Ossandón, en contra de la resolución de 3 de abril de 2024, dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT N° 5249-2023, RUC N° 2300558519-8, por la que se decretó orden de detención en su contra, en forma ilegal, constituyendo así un acto que afecta la libertad individual del amparado, con el fin de que se disponga que se deje sin efecto.

Expone que el 19 de febrero de este año se fijó audiencia de formalización, para el 3 de abril, siendo el amparado uno de los imputados.

Con fecha 26 de marzo de 2024, su representado viajó a Perú, con fines personales, teniendo agendado su regreso para el 1 de abril de 2024, volviendo el día siguiente, antes de la audiencia y sin que existieran restricciones a su libertad ambulatoria.

Refiere que, no obstante, ello, estando el 1 de abril de 2024 en Lima, fue diagnosticado con COVID-19, según fue acreditado ante el Tribunal, mediante certificado médico emitido en Perú, por lo que se vio absolutamente impedido de viajar a Chile, al habersele ordenado aislamiento obligatorio y reposo médico total por 7 días.

El día programado se realizó la audiencia de formalización de la investigación, a la que el amparado no compareció, por la razón ya indicada. En esa oportunidad, su abogado defensor expresó el motivo de la incomparecencia justificada del recurrente, aludiendo al certificado médico.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

El Ministerio Público, por su parte, solicitó que se ordenara la detención del imputado, argumentando que la incomparecencia no estaba debidamente justificada, restando legitimidad al certificado médico, junto con agregar que según el registro migratorio nacional del amparado, había salido de Chile el 26 de marzo, señalando que por diversas fuentes extraoficiales había información de que su representado fue visto en Chile el día 31 de marzo, sin precisar personas, lugares ni horarios; petición a la que se unió el querellante.

Da cuenta que luego del debate, en que la señora Jueza consultó a la Defensa si tenía los pasajes con la fecha del regreso del amparado, que no fueron exhibidos en ese momento -pero que acompaña ahora-, se hizo un receso, y luego el Tribunal accedió a la solicitud.

El segundo motivo, dice relación con la fidelidad o suficiencia del certificado médico presentado en la audiencia, respecto del cual la señora Jueza hizo referencia al período de duración del reposo indicado, aludiendo a una Resolución del Ministerio de Salud de Perú, que dispuso que el reposo para casos como este es de 5 y no de 7 días.

Argumenta, por una parte, que no es efectivo que el domicilio informado por el imputado, ubicado en calle El Pastizal N° 11.395, comuna de Lo Barnechea, no sea el suyo. Él vive en ese lugar y no puede hacerse cargo de la información errada entregada por una asesora del hogar, que la resolución ni siquiera individualiza. Por el contrario, jamás ha pretendido asilarse en una supuesta falta de notificación para justificar su inasistencia, a esta audiencia ni a las anteriores, habiendo comparecido a todas debidamente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

representado. En efecto, el día 3 de abril compareció su abogado quienes justificaron su inasistencia.

Esgrime que si se razona como lo hizo el Tribunal, hay un error procedimental que torna en ilegal la detención ordenada, en tanto de conformidad con el artículo 26 del Código Procesal Penal, en caso de no constar una notificación efectiva en forma personal, si se considera que el domicilio proporcionado era inválido, lo que correspondía era decretar que las resoluciones en lo sucesivo se notifiquen por el estado diario, pero no la detención, que aparece como injusta y desproporcionada, máxime si se considera que la audiencia del día 3 de abril era la primera actuación judicial de formalización que se iba a realizar, porque en las fechas anteriores fue reprogramada por petición de la Fiscalía -esgrime-.

Sobre el segundo argumento de la resolución, afirma que es altamente cuestionable por un error. En efecto, manifiesta que la resolución citada por la autoridad sanitaria peruana es del día 13 de enero de 2024, N° 022-2024, y está destinada a establecer disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, como se observa de revisar la página web del Ministerio de Salud de Perú y, no resulta aplicable al actor, por no ser un trabajador en ese país.

Es más, continúa, al revisar la página web del Ministerio de Salud de Perú, al consultar los períodos de aislamiento y descanso médico, se observa que, para pacientes sintomáticos o asintomáticos sin factores de riesgo, el aislamiento se mantendrá hasta 7 días después de la fecha de la prueba.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

Estima, así, que la información sobre la cual se puso en duda la fidelidad del certificado médico, por el Tribunal, presenta un error insalvable.

Como otro motivo, resalta que luego de esta decisión, la señora Jueza Leyton se inhabilitó producto de una incidencia planteada por la defensa de otro imputado, y finalmente la audiencia no se realizó y se reprogramó la formalización de todos los imputados para el 10 de mayo del presente año.

Cita el artículo 21 de la Constitución Política de la República, y asevera que en el caso la resolución judicial deviene en ilegal, al no tener sustento normativo.

Enumera, luego, como normas infringidas el artículo 19 N° 7 letra b) de la Carta Fundamental, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas ya indicadas del Código Procesal Penal.

Solicita que se acoja la acción en todas sus partes, declarando la ilegalidad de la resolución, ordenando en consecuencia que se deje sin efecto lo resuelto el 3 de abril de 2024 por la recurrida, dejando a su vez sin efecto la orden de detención despachada en contra del amparado.

**Segundo:** Que, informó la recurrida doña Mariana Andrea Leyton Andaur, Jueza Titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Confirma que el día 3 de abril del presente año estaba fijada audiencia de formalización de la investigación, oportunidad en que la Defensa del amparado puso en conocimiento de esa magistrada la inasistencia de su representado, en razón de que, durante su viaje a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

Perú, fue diagnosticado con COVID, presentando un certificado médico emitido en ese país, que le otorgaba reposo por 7 días.

Ante las preguntas de la señora Jueza de Garantía, agregó el abogado Defensor que en principio desconocía el viaje, porque habían coordinado la asistencia días antes y, la justificación se había presentado recientemente, agregando que era común que el imputado saliera y reingresara al país, por no mantener restricciones a ese respecto.

Indica que la Fiscalía puso en duda la veracidad del certificado médico, por ser un documento simple, emitido en el extranjero, unido a que el imputado estaba en cabal conocimiento de la existencia de la audiencia y su finalidad; por lo que su presencia se estaba viendo demorada o retardada, particularmente teniendo en cuenta las diversas audiencias previas a las que habían sido citadas las partes. Ante eso, la Defensa señaló que no dudaba del actuar del amparado, quien justificó su inasistencia e incluso declaró ante el Ministerio Público.

Da cuenta que, para resolver, tuvo en consideración en cuanto a las citaciones a diversas audiencias efectuadas ante ese Tribunal, que el encartado fue buscado en el domicilio en que estaba apercibido, ubicado en El Pastizal N° 11.395, comuna de Lo Barnechea y, sin embargo, el 28 de febrero de 2024, se certificó que no vivía en ese lugar.

Respecto a la justificación por el certificado médico al que la Defensa dio lectura, consideró que no presta ningún elemento que preste fidelización conforme a nuestra legislación y, aun en el caso de estimar alguna concordancia con la normativa de Perú, saltaba a la vista -informó- que el descanso otorgado no se condecía con las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

normas vigentes del propio país, conforme la resolución dictada en audiencia, puesto que en el R.M. N° 022 MINSAL, establece un descanso evidentemente inferior por el mismo diagnóstico.

De esa forma, a su juicio, por una parte, no estaba justificada la incomparecencia y, por otra, se daban los presupuestos establecidos en el artículo 127 del Código Procesal Penal para disponer la orden de detención.

**Tercero:** Que, por resolución de 15 de abril de 2024, estimándolo necesario para una acertada resolución, se ordenó pedir informe al Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones, respecto del registro de entradas y salidas del país del amparado.

En cumplimiento de lo anterior, el Jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, remitió el Certificado de Viajes del amparado, emitido el 17 de abril de 2024.

En ese documento se observa que, durante el presente año, el recurrente registra una salida el día 15 de febrero de 2024, con destino a México, por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y una entrada desde ese mismo origen de fecha 1 de marzo de 2024; y, el último movimiento migratorio corresponde a una salida, el 26 de marzo de 2024, con destino a Perú, por la misma vía; sin registrar entrada.

**Cuarto:** Que, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo tiene por objeto velar por las formalidades legales y adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuando éste se hallare arrestado, detenido o preso, con infracción a lo dispuesto en la Carta Fundamental o en las leyes,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

pudiendo esta Corte disponer la libertad inmediata del individuo u ordenar que se reparen los defectos legales, corrigiéndolos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

Además, el mentado arbitrio puede deducirse a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, dictando la magistratura las medidas que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del amparado.

**Quinto:** Que, cabe tener presente que la orden de detención de autos librada en contra del imputado, lo fue en atención a que el tribunal, a solicitud del Ministerio Público, en audiencia de fecha 03 de abril del año en curso, dispuso la aprehensión del amparado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, ya que se estimó que de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada, según preceptúa el artículo 127 inciso 1° del Código Procesal Penal.

En efecto, para el día antes indicado -3 de abril-, el Cuarto Juzgado de Garantía de esta ciudad en causa RIT N° 5249-2023, RUC N° 2300558519-8 había fijado audiencia de formalización de la investigación en contra del indagado Coeymans Ossandón y de otros tres investigados más, por los delitos de estafa, asociación ilícita y otros, oportunidad en que el referido imputado no asistió injustificadamente, por cuanto si bien se alegó en la mentada audiencia que durante su viaje a Perú, fue diagnosticado con COVID, presentando un certificado médico simple emitido en el país vecino, que le otorgaba reposo por 7 días, dicho documento no se encuentra avalado, ni menos corroborado por el respectivo PCR u otro



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

antecedente al efecto, que diera cuenta del contagio clínico y efectivo de la referida enfermedad viral. Además, según se expuso por los intervinientes en estrado, el encartado, previo a la audiencia del día 3 de abril, fue buscado en el domicilio, ubicado en calle El Pastizal N° 11.395, comuna de Lo Barnechea y, sin embargo, el 28 de febrero del presente año 2024, se certificó que no vivía en ese lugar, aunado a que no había comparecido a actuaciones judiciales anteriores; que había cancelado su pasaje de regreso al territorio nacional desde Perú y que registra pasajes con destino internacional para el mes de mayo del presente año 2024.

**Sexto:** Que, atendido el marco fáctico y procesal enarbolado en el presente recurso de amparo – *congruencia y coherencia*- y en razón de lo indicado en el motivo precedente, y estando -en la especie- el Ministerio Público en el imperativo legal de realizar la formalización de la investigación por los *delitos de estafa, asociación ilícita y otros*, a los cuales la ley asigna pena de crimen, lo que supone cumplimiento efectivo, el señor Fiscal, en la órbita de una atribución privativa, exclusiva y excluyente, ya que había solicitado previamente al referido Cuarto Juzgado de Garantía efectuar una audiencia, en lo términos del artículo 232 del Código Procesal Penal, en fecha próxima, cumpliendo los requisitos de mencionar la individualización del imputado, la indicación de los delitos que se le atribuyeron, la fecha y lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en los mismos, y – como se dijo- ante la incomparecencia injustificada del encartado, cuya presencia judicial resultaba ser condición de validez de la citada audiencia, lo que no puede ser soslayado, en modo alguno, por la presencia de su Defensor, ya que se trata de una actuación personalísima del



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB



referido imputado, Coeymans Ossandón, se despachó la correspondiente orden de detención, por cuanto la asistencia judicial del encartado puede verse demorada o dificultada, sin que se avizore el más mínimo vicio de ilegalidad y menos arbitrariedad, actuando, la señora Jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dentro del ámbito de su competencia y observando estrictamente las formalidades legales.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **SE RECHAZA, con costas**, el recurso de amparo constitucional deducido en favor de Francisco Coeymans Ossandón, en contra del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Lo anterior con el voto en contra del ministro Aguilar, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional, por cuanto, en su concepto, para que una orden de detención sea válida, conforme fue expedida, según dispone el artículo 127 inciso 1° del Código Procesal Penal, en primer término, debe ser absolutamente indispensable para asegurar la realización de los fines del procedimiento debiendo sólo estar vigente mientras subsistiere la necesidad de su aplicación (Principio General. Párrafo 1°, Título V Libro I. del CPP), lo anterior, en relación con la justificación del antecedente médico invocado, en consonancia con lo preceptuado en los artículos 26 y 33 del citado cuerpo de leyes procesales, y especialmente cumplir en el presente caso, únicamente su validez formal, *-tratándose de un imputado fuera del territorio de la República, al momento de expedirse la orden-* que exista una solicitud de detención previa, a petición del señor Fiscal o del señor Querellante, para que en su caso, la Corte de Apelaciones solicite del Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al país en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

que se encontrare el imputado que ordene la detención previa de éste o adopte otra medida destinada a evitar la fuga de la persona, debiendo el Juez de Garantía comprobar, previamente, la concurrencia de los requisitos que admitan decretar la prisión preventiva u otra medida cautelar personal, situación que no aconteció en la especie.

**Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.**

**Redactó el ministro señor Alejandro Aguilar Brevis**

**N°Amparo-858-2024.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Elsa Barrientos G., Alejandro Aguilar B. y Abogada Integrante Catalina Infante C. Santiago, veintidos de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintidos de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VLYQXNXMYVB